

**Cynthia J. Arnson**

Programa de América Latina del Centro Internacional  
para Académicos Woodrow Wilson

## La administración Obama y América Latina: la reconfiguración angustiada

### Resumen:

La política de Estados Unidos hacia América Latina bajo la administración Obama ha sido resultado de las políticas domésticas prioritarias para Estados Unidos y de consideraciones de partido al interactuar con las nuevas realidades en América Latina. La significativa pérdida del partido demócrata en las elecciones parciales celebradas el 2 de noviembre de 2010 han profundizado aún más el rencor partidista en el que ha estado envuelto Washington durante los últimos años. La administración Obama ha heredado dos guerras y un sistema financiero cuasi-colapsado de la anterior administración. Cuenta con poco espacio para maniobrar, de modo que no quiere ni hablar de gastar capital político fungible en costosas luchas internas que involucran al hemisferio occidental. Respecto al hecho de que América Latina esté diversificando sus socios exteriores, Estados Unidos no cuenta con el poder de oponerse a la entrada de estos nuevos socios políticos, económicos y militares. Pero, reconociendo la estabilidad regional y las prósperas democracias como éxitos más que como amenazas, expone una nueva visión de las relaciones del hemisferio. El compromiso de la administración Obama por el multilateralismo y en el caso de México por compartir responsabilidades respecto a la violencia generada por el crimen organizado, son cambios significativos que sirven como base para la creación de un compromiso diplomático más creativo y vigoroso.

### *Palabras clave:*

Administración Obama, Barack Obama, Arturo Valenzuela, Brasil, Centroamérica, Venezuela, Haití, China, Irán, Estados Unidos, crisis económica, Iniciativa Mérida, reducción de la demanda

**Abstract:**

U.S. policy toward Latin America under the Obama Administration has been a product of domestic U.S. priorities and partisan considerations as they interact with changed realities in Latin America. The significant losses for the Democratic Party in the November 2, 2010, mid-term elections are likely to deepen the partisan rancor that has enveloped Washington in recent years. The Obama administration inherited two wars and the near-collapse of the U.S. financial system from the previous administration. It has little room to maneuver, let alone expendable political capital for costly domestic battles involving the Western hemisphere. As Latin American countries diversify their foreign partners, U.S. power to contest the entry of new political, economic, and military actors is limited. But recognizing the region's stable, prosperous democracies as successes rather than threats sets forth a new vision of hemispheric relations. The Obama administration's commitment to multilateralism and, in the Mexican case, to shared responsibility for the violence by organized crime, are significant shifts that serve as a basis for more vigorous and creative diplomatic engagement.

*Key words:*

Obama Administration, Barack Obama, Arturo Valenzuela, Brazil, Central America, Venezuela, Haití, China, Iran, U.S., economic crisis, Mérida Initiative, demand reduction

Cynthia J. Amson<sup>1</sup>

Programa de América Latina del Centro Internacional  
para Académicos Woodrow Wilson

## La administración Obama y América Latina: la reconfiguración angustiada

El 2 de noviembre de 2010 el hosco y preocupado electorado estadounidense castigó al presidente Barack Obama dejando a 67 representantes demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado sin cargo –el mayor número desde 1938– y devolviendo la Cámara de Representantes al control republicano.

Una débil recuperación económica, una persistente y alta tasa de desempleo, y elevados gastos estatales y déficit avivaron un contragolpe contra las políticas de Obama y, en general, contra el rol intervencionista del Gobierno.

Los efectos más inmediatos de este reajuste partidario en la Cámara fue colocar la presidencia del Comité en manos de los republicanos. Los conservadores de Florida asumieron la presidencia del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y su subcomité para el hemisferio occidental, y las preocupaciones republicanas –Cuba, Venezuela y el creciente rol

de Irán en la región– posiblemente dominarán la agenda del Congreso estadounidense. El ascenso del insurgente “Tea Party”, que se ha comprometido a ser un ataque frontal a la presidencia de Obama, va a aumentar el rencor partidista que ha envuelto a Washington en los últimos años y va a disminuir los resquicios de esperanza para una reconfiguración de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.

Desde que Obama tomó posesión de su cargo, en enero de 2009, su política respecto a América Latina ha estado condicionada por dos contextos críticos.

El primero de ellos surgió con el 11 de septiembre y sus efectos transformadores sobre la política exterior de Estados Unidos. Después de los ataques terroristas en Nueva York y Washington, el ejercicio de poder de Estados Unidos en el mundo dejó de reflejarse en instituciones y normativas internacionales, que

servieron para que las acciones de Estados Unidos fueran menos amenazadoras para otros países del mundo (Litwak, 2007; Iken berry, 2000). Cuando el presidente George Bush abandonó su cargo, el nivel de desaprobación en Estados Unidos se situó en la tasa más elevada en la historia de las encuestas de Gallup; empatando con el presidente de Venezuela Hugo Chávez y con Alan García, presidente de Perú en el segundo puesto de los presidentes con menos apoyo de América Latina, sólo por detrás de Fidel Castro en Cuba (Newport, 2008; Latinobarómetro, 2007). Por eso, cuando Obama asistió a la Cumbre de las Américas en Puerto España, Trinidad y Tobago, en abril de 2009 no pudo haber sido recibido más calurosamente. Su petición para “una colaboración del siglo XXI, libre de las posturas del pasado” elevó las expectativas de poder llevar a cabo un cambio cualitativo en las relaciones entre Estados Unidos y la región (Obama, 2009).

El segundo momento político surgió de la crisis financiera estadounidense de septiembre de 2008, que generó grandes estragos en Estados Unidos y otras partes del mundo y, en el caso de América Latina, especialmente a aquellos países que estaban más profundamente vinculados en lo económico con Estados Unidos: México, Centroamérica y el Caribe. El coste que tuvieron que asumir los contribuyentes para impedir el desplome de Wall Street, unido a la reforma de la sanidad –el logro de Obama– y los paquetes de importan-

tes medidas de estímulos para contribuir a activar la economía doméstica sumaron cientos de miles de millones de dólares al presupuesto federal. A esto hay que añadirle el coste de dos guerras en el extranjero y los efectos duraderos de dos reducciones fiscales promulgadas durante las últimas décadas y que expiran antes del final de 2010.

Como resultado, en 2010, el déficit fiscal de Estados Unidos alcanzó los sorprendentes 3,1 billones de dólares, equivalentes al 9,1% del PIB. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, desde 1945 el déficit de Estados Unidos nunca había sido tan elevado en relación al tamaño de la economía. Mientras, el crecimiento económico estadounidense sólo alcanzó un anémico 2% a finales de 2010, y la tasa de desempleo oscilaba entre el 9 y 10%. En septiembre de 2010, la pobreza en Estados Unidos era mayor que en cualquier otro año desde que el gobierno empezara a elaborar estas estadísticas: el 14% de los estadounidenses son pobres, el mismo índice que en Chile (U.S. Department of Commerce, 2010; U.S. Bureau of Labor Statistics, 2010; Economist Intelligence Unit, 2010; Morillo, 2010).

Todo este desorden macroeconómico, claro está, contrasta claramente con lo que estaba sucediendo en la región (Domínguez y Fernández de Castro, 2010). Estimulados por los altos precios que países como China, entre otros, estaban pagando por productos energéticos, agrícolas o de materias primas,

las economías latinoamericanas, crecieron de media entre un 5% y 6% entre 2004 y 2008 –según datos del Banco Mundial– doblando la tasa de Estados Unidos durante el mismo espacio de tiempo, generando una brecha que sólo ha aumentado desde el comienzo de la recesión. Así, las economías de América del Sur resistieron la sacudida económica global proveniente de Wall Street, adoptaron políticas anticíclicas y volvieron a niveles de crecimiento elevados (Kacef, 2010). Mientras, los programas sociales sacaron a decenas de millones de personas de la pobreza y, en menor medida, redujeron la inequidad (Lustig, 2009).

Cuando Obama tomó posesión del cargo, China había reemplazado a Estados Unidos como mayor socio comercial de Brasil y Chile, seguidos de Perú en 2010 (CEPAL, 2010; Aráoz y Giampietri, 2010). La pregunta que se planteaba la política estadounidense entonces no era sólo cómo adaptarse a estos cambios sino también cómo relacionarse con líderes que han ampliado considerablemente sus socios políticos y comerciales mientras que la administración Bush llevaba a cabo la guerra contra el terrorismo.

Una parte de la respuesta, al menos en Foggy Bottom<sup>2</sup>, era la de “ir con la corriente”. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, visitó diecisiete países de América Latina durante sus primeros dieciocho meses en el cargo, más que cualquiera de los diez últimos secretarios de Estado (Kessler, 2010). Durante el segundo

año de mandato de Obama, con Arturo Valenzuela finalmente ocupando el cargo de secretario adjunto de Estado para el Hemisferio Occidental<sup>3</sup>, los funcionarios estadounidenses adoptaron una nueva visión sobre las relaciones hemisféricas, dejando a un lado a la visión maniquea del mundo que divide entre amigos y enemigos (recordemos, por ejemplo, la Guerra Fría y posteriormente a la administración Bush con su “eje del mal”). En la nueva visión, los países con democracias prósperas y economías sostenibles lograron éxitos significativos como para ser bien recibidos en vez de ser considerados amenazas para los intereses de Estados Unidos. En la región andina, la administración se esforzó por desglosar la izquierda bolivariana, tendiendo la mano al presidente de Ecuador, Rafael Correa y trabajando para reestablecer relaciones con el presidente boliviano Evo Morales (quien expulsó al embajador estadounidense y al Departamento Estadounidense Antidrogas –DEA– del país en 2008 y echó a la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos de la región con mayor productividad de droga).

La administración continuó con una política –iniciada por Tom Shannon, secretario de Estado adjunto durante los últimos dos años de la administración Bush– de evitar la confrontación con el presidente Hugo Chávez. Los conservadores estadounidenses criticaron a la administración Obama por no oponerse en mayor medida contra los ataques a la demo-

cracia llevados a cabo por Chávez en Venezuela, además de criticar la aparente indiferencia con la que se tratan las cada vez más sólidas relaciones de Venezuela con Irán. La lógica de la política estadounidense residía en privar a Chávez de oportunidades para culpar de los crecientes problemas internos del país a Estados Unidos. De hecho, en medio de una creciente crisis económica y de seguridad pública en Venezuela, la administración Obama hizo todo lo posible por mantener una postura neutral durante las elecciones parlamentarias en Venezuela en septiembre de 2010. El 27 de septiembre de 2010, por ejemplo, un portavoz del Departamento de Estado, suavemente apuntó que “todos los venezolanos ahora pueden profundizar en su diálogo y demostrar su respeto hacia la diversidad de opiniones que es imprescindible en una democracia” (Toothaker, 2010). Y como consecuencia de la firma del acuerdo histórico entre Rusia y Venezuela para construir la primera planta nuclear en Venezuela, el propio Obama defendió el derecho de Venezuela de generar energía nuclear con fines pacíficos. En una afirmación increíblemente conciliadora, Obama reconoció “el derecho de desarrollar de forma pacífica energía nuclear” por parte de Venezuela (Agence France Presse, 2010). Por su parte, Chávez mostró poco interés por aprovechar una reducción de las tensiones, rechazando al diplomático afroamericano Larry Palmer como embajador de Estados Unidos en

Venezuela como protesta a las críticas emitidas por Palmer acerca del “chavismo” durante su sesión de confirmación en el Senado. Mientras tanto, y según el Departamento de Energía estadounidense, más del 60% de las exportaciones de petróleo de Venezuela siguen destinadas a Estados Unidos (representando el 12% de las importaciones estadounidenses de petróleo), generando una singular forma de interdependencia económica en claro contraste con la distancia en las relaciones políticas.

Donde se puede ver un cambio más evidente en el discurso político y, en menor medida en la práctica, es en las relaciones entre Estados Unidos y México, marcando la creciente –y comprensible– tendencia de la política estadounidense de dar prioridad al Norte de América sobre el Sur. Funcionarios de alto nivel de Estados Unidos han adoptado una responsabilidad compartida para la escalada de narcotráfico y violencia en la que está sumido México como uno de los principios de las relaciones bilaterales. La secretaria de Estado Hillary Clinton marcó la pauta durante su viaje a México en marzo de 2009 al admitir que “nuestra insaciable demanda de drogas ilegales alimenta el tráfico de drogas, nuestra incapacidad de impedir que las armas sean ilegalmente llevadas de contrabando más allá de nuestras fronteras para armar a estos criminales que causan la muerte a policías, de militares y de civiles” (Sheridan, 2009). En abril de 2009, en uno de sus primeros viajes al extran-

jero como presidente, Obama elogió a México por asumir la violencia provocada por los cárteles afirmando que la responsabilidad no es de México únicamente. En una rueda de prensa conjunta con el presidente mexicano Felipe Calderón, Obama reconoció que “la demanda para estas drogas en Estados Unidos es lo que está ayudando a los cárteles a mantener sus negocios” (The White House, 2009).

Estas palabras representan la cruda realidad: se calcula que el consumo por parte de Estados Unidos de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas sobrepasa los 60.000 millones de dólares anuales y entre 18.000 y 39.000 millones de dólares fluyen hacia el Sur en forma de contrabando de grandes sumas de dinero y armas de gran calibre para los cárteles (Selee, Shirk, y Olson, 2010). Según cifras del Gobierno estadounidense de las 75.000 armas de fuego incautadas por el gobierno de México en los últimos tres años, alrededor del 80%, 60.000 del total, provenían de Estados Unidos (Goodman y Marizco, 2010).

Discursos aparte, mover la nave del Estado ha sido un proceso lento y gradual. Una lista cada vez más amplia de agencias estadounidenses –la Oficina de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, (ATFE) el Departamento de Justicia, la Aduana, la Seguridad Nacional– han intensificado su cooperación estratégica con sus equivalentes mexicanos en cuestiones que van desde el

intercambio de información hasta la normativa bancaria. A raíz de la Iniciativa de Mérida puesta en marcha en 2007 por el presidente Bush y el presidente Calderón, el Congreso autorizó el gasto de cerca de 1.4 miles de millones de dólares en armas, aviones y capacitación (aunque a mediados de 2010 sólo un pequeño porcentaje de la ayuda ha sido entregada). Durante el segundo año de mandato de Obama y, empujado por el embajador estadounidense en México, Carlos Pascual, la cooperación estadounidense en materia de seguridad con México cambió, restando importancia a la transferencia de armas y equipos pesados al ejército mexicano y centrándose en tareas a largo plazo como son el fortalecimiento de los servicios, incluyendo el sistema judicial, los fiscales y la policía (Selee, Wilson, y Putnam, 2010). La cooperación entre actores federales, estatales y locales a ambos lados de la frontera aumentó en cuestiones tanto locales como nacionales, prestando especial atención a la modernización de las infraestructuras transfronterizas y ayudando a las comunidades fronterizas. Mientras, Gil Kerlikowske, director de la Oficina de la Casa Blanca de Política Nacional para el Control de las Drogas, realizó modestos pero, no obstante, significativos cambios en el presupuesto destinado a la lucha contra el narcotráfico, aumentando el gasto en la prevención y el tratamiento por consumo de drogas en más del 17% en 2010 y conside-

rando el consumo nacional de drogas tanto como un problema tanto de salud pública como policial (Executive Office of the President, 2010; The White House blog, 2010; Washington Office on Latin America, 2010).

A pesar del cambio de énfasis, México demuestra mejor que cualquier otro país de América Latina cómo las consideraciones de política interna de Estados Unidos triunfan sobre la política exterior de tal manera que socavan las esperanzas de que haya un cambio de rumbo. Dejando a un lado las promesas de Obama y Clinton, en septiembre de 2009 la Oficina de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (AFTE) sólo ha revocado las licencias de once tiendas de armas de fuego a lo largo de la frontera de 2000 millas que comparte Estados Unidos con México (Goodman y Marizco, 2010). Y, mostrando respeto a los grupos de interés a favor de las armas y la reñida carrera de los senadores por su reelección en el oeste de Estados Unidos, Obama no ha restituido la prohibición contra las armas de asalto existente desde hace diez años y que venció en 2004<sup>4</sup> (Charles, 2010, Tapper y Sunlen, 2009). La administración se opuso de manera previsible a la iniciativa ciudadana en California, conocida como Proposición 19, para la legalización del consumo de marihuana en el estado (la iniciativa fue derrotada por un 44% frente al 56%). Mientras que la contradicción por parte de la Proposición 19 con la Ley federal era obvia,

la administración dejó escapar la oportunidad de generar un debate más amplio sobre la reducción de la demanda estadounidense y estrategias anti-droga, tal y como se estaba reclamando por muchos en el Congreso.

El comercio y la inmigración –la cuestión “interdoméstica” por excelencia para América del Norte– también sufrió reveses en un momento de gran recesión en la economía estadounidense (Lowenthal, 2010). Poderosos gremios con fuertes lazos con el Partido Demócrata persuadieron a los legisladores para mantener la prohibición a la entrada de camiones mexicanos a Estados Unidos, exigiendo que en su lugar los productos mexicanos fueran cargados a camiones estadounidenses una vez hayan cruzado la frontera. La disputa por los camiones –una violación del TLCAN que continúa propagándose– llevó al Gobierno mexicano a imponer aranceles compensatorios en algunos productos estadounidenses que se exportaban a México, apuntando especialmente a aquellos estados en los que sus representantes electos habían apoyado la prohibición. La reforma migratoria también se ha languidecido a pesar de que el propio presidente haya admitido que el sistema estadounidense de inmigración esté “averiado” (The White House, 2009). Cuando el sentimiento anti-inmigrante obtuvo respaldo en plena recesión, la Casa Blanca no gastó capital político en una reforma de la Ley de Inmigración. En cambio, apoyó la aprobación del “Dream Act” (Ley de Sueños), que hubiera



abierto a los hijos de migrantes no-documentados un camino a la ciudadanía; esta iniciativa fue rechazada por el Congreso al terminar la sesión de ‘pato cojo’ después de las elecciones de noviembre. Estados individuales –muy notorio fue el caso de Arizona– llenaron el vacío, aprobando una Ley restrictiva, y podría decirse que racista, que permitía a los agentes del orden a detener individuos basándose en “sospechas razonables” de que eran extranjeros indocumentados. La Ley fue una invitación para maltratar a los hispanos y fue recurrida ante los tribunales por el Gobierno Federal, una situación jurídica de alegalidad en la que aún continúa.

Más allá de México, las antiguas pautas de interacción con América Latina evolucionan muy lentamente. Dejando de lado las promesas de multilateralismo, el gobierno de Estados Unidos no ha vacilado en “hacerlo solo” cuando las percepciones de intereses nacionales difieren de las del hemisferio. Esto fue especialmente cierto durante el primer año de Obama (y, como los funcionarios del Departamento de Estado se apresuraron en señalar, antes de la confirmación de Valenzuela como secretario de Estado adjunto). Estados Unidos rompió con los principales aliados del hemisferio al reconocer las elecciones presidenciales de noviembre de 2009 organizadas por el régimen que había dado el golpe de Estado en Honduras; la división en el hemisferio respecto a la legitimidad de esas elecciones y la readmisión de Honduras en la

Organización de Estados Americanos continúa hasta el día de hoy.

Anteriormente en ese mismo año, la administración hizo una “chapuza” con una bomba de relojería que les entregó la administración Bush; se trataba de las negociaciones secretas con el Gobierno de Colombia sobre la ampliación de acceso por parte Estados Unidos a siete bases militares. Cuando las noticias de las negociaciones fueron filtradas a los medios colombianos (los funcionarios estadounidenses alegan que la filtración fue por parte del Gobierno de Colombia), los datos desataron un escándalo diplomático a lo largo de toda la región que aisló tanto a Colombia como a Estados Unidos<sup>5</sup>.

Desde entonces, sin embargo, la administración Obama ha tratado de redefinir las relaciones con Colombia. A diferencia del ritmo frenético de su predecesor, el presidente Álvaro Uribe, el presidente Juan Manuel Santos no visitó Washington ni una sola vez durante sus primeros en el cargo; así, en octubre de 2010 una delegación estadounidense de alto nivel, encabezada por el vicesecretario de Estado James Steinberg viajó a Bogotá, poniendo de relieve una asociación estratégica en materia de derechos humanos y gobernanza democrática, cooperación energética e innovación científica (U.S. Department of State, 2010). El contraste con la ofensiva anti-terrorista y antinarcótics de años anteriores no podía ser mayor.

A la larga, la política de Estados Unidos hacia América Latina va a ser un producto de prioridades nacionales de Estados Unidos y de las consideraciones del partido a medida que interactúen con las nuevas realidades de América Latina. Hay pocos datos que permiten pensar –y muchos que niegan– que Estados Unidos le es indiferente a América Latina o que ya no considera al hemisferio una prioridad en términos diplomáticos o económicos. La burocracia permanente de Washington, por no hablar de las embajadas sobre el terreno, interactúa diariamente con sus homólogos en la región; ocultas tras grandes declaraciones de principios o iniciativas, las inversiones extranjeras directas de los Estados Unidos en América continúan eclipsando las de los otros países o regiones, suponiendo el 37% del total de la Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina y el Caribe entre 1998 y 2008 (CEPAL, 2009:29). Y hasta en tiempos de gran recesión, la ayuda por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional destinada a América Central realmente ha aumentado, al igual que el compromiso de seguir con la creación de microempresas, una práctica demostrada de desarrollo (USAID, 2010). Incluso frente a los absurdos obstáculos interpuestos por miembros del Senado estadounidense, Estados Unidos siguió siendo –y por un margen abrumador– el mayor donante para la reconstrucción de Haití después del terremoto. Lo que no tenía sentido, sin

embargo, fue la práctica, común en todas la administraciones, de encontrar grandes temas (“pilares” en palabras de Valenzuela) sobre los que se fundamentaría la política<sup>6</sup>. No sólo el análisis por parte de Estados Unidos sobre los propios resultados de muchos de estos asuntos es que fueron pésimos en áreas como la reducción de la pobreza e inequidad, cambio climático y energías alternativas, sino que los países latinoamericanos y las instituciones internacionales tenían mucho más que enseñarle a Estados Unidos que viceversa. Con excepción de la Iniciativa de Mérida, y los programas de cooperación en seguridad recientemente puestos en marcha con Centroamérica y el Caribe, los recursos financieros de Estados Unidos son demasiado limitados para contribuir de forma significativa a esta amplia agenda (Naím, 2010).

La diversidad de la región contradice la idea de que pudiera existir una política de talla única por parte de Estados Unidos para la región. México, Centroamérica y el Caribe están profundamente vinculados a su vecino del norte en materia de comercio económico (especialmente en las remesas), y en términos de población, y cada vez más en términos de tráfico de drogas; Brasil, con el 40% del PIB total de la región, domina entre los países con democracias instauradas; y las naciones de los Andes se alinean desde el centro-derecha en Colombia hasta diferentes izquierdas o regímenes populistas autoritarios. El reconoci-

miento de esta diversidad, y la necesidad de una diplomacia con matices para afrontarla es un claro avance respecto a décadas anteriores.

Al mismo tiempo, los niveles de crecimiento y desarrollo en la región durante los últimos diez años han creado nuevas oportunidades para la proyección y ejercicio de “poder blando” en los países latinoamericanos. El poder de Estados Unidos de oponerse a la entrada de nuevos actores –Rusia, Irán, China, Siria– está realmente limitado, ya que América Latina ha diversificado sus socios políticos y de comercio exterior. En este entorno los intereses latinoamericanos y estadounidenses van a colisionar inevitablemente en algunas ocasiones, tal y como sucedió cuando el presidente de Brasil, Lula, trató de negociar un acuerdo con Irán acerca de sus ambiciones nucleares, en oposición a la postura de Estados Unidos y de las principales potencias del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (Sweig, 2010). Pero la pérdida de control por parte de Estados Unidos no significa necesariamente la pérdida de influencia; aquí es donde la promesa de la administración Obama de multilateralismo representa no sólo una admisión tácita de una influencia disminuida sino también una invitación a realizar una diplomacia más energética y creativa.

Finalmente, el mal funcionamiento y la polarización del sistema político estadounidense sirven para reducir la coherencia política, en la misma medida que los múltiples

desafíos económicos y de seguridad nacional, tanto en el ámbito doméstico como en el exterior, ejercen un efecto negativo sobre las grandes iniciativas políticas para la región. Las posturas enfrentadas en materia de política exterior de las ramas ejecutiva y legislativa fueron calificadas por un académico como una “invitación al enfrentamiento” (Corwin, 1984), que ha degenerado en el tipo de partidismo duro y de mezquindad que crea un punto muerto absoluto. Para finales del año fiscal de 2010, por ejemplo, el Congreso no ha aprobado ninguno de los doce proyectos financieros pendientes. La ayuda a la población desesperada de Haití fue demorada por un senador, el republicano Tom Coburn –conocido coloquialmente como “Dr. No”– quien se opuso al gasto de 5 millones para crear una oficina de coordinación en Haití encargada de supervisar la ayuda post terremoto. En vísperas de las elecciones en noviembre de 2010, la senadora republicana moderada Susan Collins, de Maine, lamentó que “en los tiempos modernos no he visto un nivel de división tan encarnizado y un partidismo tan atronador como el que hay ahora en el Senado” (Collins, 2010).

El intento de asesinato perpetrado contra la congresista Gabrielle Giffords (Partido Demócrata-Arizona) en enero de 2011 que dejó seis muertos, entre ellos una menor de nueve años, tuvo el efecto inmediato de suavizar la incendiaria retórica política, mientras que una nación horrorizada contemplaba las

consecuencias de un tipo de discurso divisorio. Queda por ver si este civismo, nuevamente encontrado, permanecerá.

La administración Obama heredó dos guerras y un sistema financiero estadounidense al borde del colapso de la anterior administración. Ha tenido poco espacio para maniobrar, mucho menos capital político fungible para caras batallas nacionales que implican al hemisferio occidental. Sin embargo, ya se dieron algunos atisbos de cambio a principios de 2011. La administración, criticada por permitir que la política hacia Cuba siguiera como rehén de las dinámicas en materia electoral cubano-estadounidenses en Florida y Nueva Jersey, anunció una modesta relajación en cuanto a las restricciones de viajes y envío de dinero a Cuba, ampliando los contactos de “people to people” iniciados durante los años de Clinton y después anulados por Bush. Y, en su discurso anual sobre el Estado de la Unión, Obama anunció que viajaría a Brasil, Chile y El Salvador en marzo de 2011. Queda por ver si con miras a las elecciones presidenciales de 2012 se impulsará la reforma migratoria como prioridad en la agenda política para consolidar el voto hispano. Dejando al margen la decepción, sin embargo, los que se ocupan de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina deberían acoger con satisfacción el cambio de tono y las maneras de Estados Unidos. Si estos cambios van a conllevar a una visión diferente del compromiso estratégico de Estados Unidos

con América Latina es una cuestión que a día de hoy no tiene respuesta.

## Referencias bibliográficas

- Agence France Presse (2010): "Obama backs Venezuela's right to nuclear energy" October 20.
- Aráoz, Mercedes y Luis Giampietri (2010): "Perú es el principal destino de las inversiones chinas en América Latina", Infolatam, 22 de abril de 2010.
- Charles, Deborah (2010): "Calderon urges U.S. to reinstate assault weapons ban" Reuters, 21 de Mayo.
- Collins, Susan M. (2010): "Congress got nasty. Here's how to fix it" *Washington Post*, 10 de octubre.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe, *La República Popular de China y América Latina y el Caribe: hacia una relación estratégica*, Santiago, abril de 2010.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe, *Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean*, 2009, pp. 9-59.
- Corwin, Edward S (1984): *The President, Office and Powers*, (New York, NY: New York, University Press.
- Domínguez, Jorge and Rafael Fernández de Castro, eds., *Contemporary Inter-American Relations* (Routledge: 2010).
- Economist Intelligence Unit, "Bernanke's next move: From our Chief Economist," EIU weekly newsletter, October 28, 2010.
- Executive Office of the President, Office of National Drug Control Policy, "FY 2011 Drug Control Program Highlights," May 2010, <http://www.whitehousedrugpolicy.gov>
- Goodman, Colby and Michel Marizco, "U.S. Firearms Trafficking to Mexico: New Data and Insights Illuminate Key Trends and Challenges," Woodrow Wilson International Center for Scholars, Mexico Institute and University of San Diego Trans-Border Institute, Working Paper Series on U.S.-Mexico Security Cooperation, September 2010, <http://www.wilsoncenter.org/news/docs/U.S.%20Firearms%20Trafficking%20to%20Mexico-%20Goodman%20Final.pdf>
- Ikenberry, John, *After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars* (Princeton, NJ): Princeton University Press, 2000).
- Kacef, Osvaldo (2010): "América Latina frente a la crisis internacional: Por qué esta vez fue diferente?" *Pensamiento Iberoamericano*, Vol. 6, junio de 2010, pp. 81-102, <http://www.pensamientoiberoamericano.org/sumarios/6/retos-y-oportunidades-ante-la-crisis/>
- Kessler, Glenn, "America and the Americas," *Washington Post*, July 9, 2010, <http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/graphic/2010/07/08/GR2010070806089.html>
- Latinobarómetro 2007, cited in "Latinobarómetro Poll: Latin Americans, Despite, Stereotype, Are Political Moderates, World Public Opinion, <http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/brlatinamericara/299.php?nid=&id=&pnt=299&lb=brla>
- Robert Litwak, *Regime Change: U.S. Strategy through the Prism of 9/11* (Washington, D.C. and Baltimore, MD: Woodrow Wilson Center Press and Johns Hopkins University Press, 2007).
- Lowenthal, Abraham F., "Obama and the Americas: Promise, Disappointment, Opportunity," *Foreign Affairs*, Vol. 89, No. 4, Julio-Agosto 2010, pp. 110-124.
- Lustig, Nora, "Desigualdad y pobreza bajo las 'nuevas izquierdas' en América Latina," Woodrow Wilson Center Update on the Americas, No. 5, octubre de 2009, [http://www.wilsoncenter.org/topics/pubs/LAP\\_090716\\_Lustig%20Bulletin%20ESP.pdf](http://www.wilsoncenter.org/topics/pubs/LAP_090716_Lustig%20Bulletin%20ESP.pdf)
- Morello, Carol, "Poverty rate at highest level in half-century, data show," *Washington Post*, Septiembre 16, 2010.
- Naím, Moisés, "Mientras Washington Duerme," *El País*, 19 de septiembre de 2010.
- Newport, Frank, "Bush's 69% Job Disapproval Rating Highest in Gallup History," April 22, 2008, <http://www.gallup.com/poll/106741/bushs-69-job-disapproval-rating-highest-gallup-history.aspx>

- Obama, Barack, "Choosing a Better Future in the Americas," Abril 16, 2009.
- Selee, Andrew, David Shirk, and Eric Olson, "Five Myths about Mexico's drug war," *Washington Post*, Junio 9, 2010.
- Selee, Andrew, Christopher Wilson, and Katie Putnam, *The United States and Mexico: More than Neighbors* (Washington, DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars Mexico Institute), 2010.
- Sweig, Julia, "A New Global Player: Brazil's Far-Flung Agenda," *Foreign Affairs*, Vol 89, No. 6, Noviembre/Diciembre 2010, 173-184.
- Tapper Jake and Sunlen Miller, "President Obama to Face Opposition from Gun Lobby, Possibly Democrats, to Ratify Treaty on Firearms Trafficking," ABC News, Abril 17, 2009.
- Toothaker, Christopher, "Opposition hopes to rein in Chavez after election," Associated Press, Septiembre 27, 2010.
- U.S. Bureau of Labor Statistics, "Labor Force Statistics from the Current Population Survey," Octubre 21, 2010; <http://data.bls.gov>
- U.S. Department of Commerce, "Statement from U.S. Commerce Secretary Gary Locke on the Advance Estimate of GDP in the Third Quarter of 2010," Press Release, October 29, 2010; <http://www.commerce.gov/news/press-releases/2010/10/29/statement-us-commerce-secretary-gary-locke-advance-estimate-gdp-third>
- U.S. Department of State, "Remarks at High Level Partnership Dialogue With Colombia," James B. Steinberg, Deputy Secretary of State, Bogotá, Colombia, Octubre 25, 2010, <http://www.state.gov/s/d/2010/150028/html>
- Washington Office on Latin America, "Obama's New National Drug Control Strategy: an Overdue Step in the Right Direction, but Still a Long Way to Go," Press Release, Mayo 11, 2010.
- White House, The, Blog, "Launching America's New Approach to the Drug Problem," posted by Gil Kerlikowske, Mayo 11, 2010, <http://www.whitehouse.gov/blog/2010/05/10/launching-america-s-new-approach-drug-programs>
- White House, The, Office of the Press Secretary, "Joint Press Conference with President Barack Obama and President Felipe Calderón of Mexico, Los Pinos, Mexico City, Mexico, Abril 16, 2009, [http://www.whitehouse.gov/the\\_press\\_office/JOint-Press-Conference-With-President-Barack-Obama-And-President-Felipe-Calderon-Of-Mexico-4/16/2009/](http://www.whitehouse.gov/the_press_office/JOint-Press-Conference-With-President-Barack-Obama-And-President-Felipe-Calderon-Of-Mexico-4/16/2009/)

## Notas

- <sup>1</sup> La autora quiere agradecer a Adam Drolet, becario del Programa Latinoamericano por su incalculable ayuda a la hora de recabar información.
- <sup>2</sup> “*Foggy Bottom*” se usa como metónimo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, cuyas oficinas centrales están en ese barrio. (Nota del ed.)
- <sup>3</sup> La sesión de confirmación de Valenzuela se realizó en julio de 2009, pero uno de los votos necesarios para su confirmación fue retrasado durante varios meses por el líder del Tea Party, el senador republicano Jim Demint de California del Sur quien se oponía a la política de la administración Obama en Honduras.
- <sup>4</sup> La administración alegó que en cambio iba a presionar al Senado para que ratificara la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, conocido como CIFTA. El CIFTA fue aprobado por la OEA en 1997 y presentado al Congreso el año siguiente por el presidente Bill Clinton.
- <sup>5</sup> El Tribunal Constitucional de Colombia dictaminó que el Acuerdo de Cooperación era ilegal, ya que no se presentó al órgano legislativo colombiano. El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos no hizo avanzar la cuestión en el Congreso colombiano.
- <sup>6</sup> Esos “pilares” incluían: seguridad ciudadana, equidad social, oportunidades económicas y energías limpias. <http://www.state.gov/p/wha/index.htm>

